Sección internacional

GRECIA

Los socialistas emprenden un proyecto neoliberal

En los últimos años la economía helénica ha registrado un escaso dinamismo y un aumento de las presiones inflacionarias. Con respecto al conjunto de naciones de la OCDE, el país mediterráneo ha sufrido rezagos importantes en la producción, el empleo y el combate a la inflación. Este panorama, producto de deficiencias estructurales y del inestable ambiente internacional, ha recrudecido los desequilibrios de la balanza de pagos y de las finanzas públicas. En octubre de 1985 el Gobierno socialista puso en marcha un programa de estabilización tendiente a corregir los desajustes fundamentales y promover un desarrollo económico no inflacionario. En términos generales, el programa plantea mantener bajo control el crecimiento de la demanda agregada por medio del abatimiento del gasto público y de los pagos al factor trabajo, de incrementos en la carga fiscal y las tasas de interés, así como de una adecuación de la estructura de los precios relativos. Todo ello permitiría inducir una reasignación de recursos en favor del sector privado, atenuar los desajustes externo y

Las informaciones que se reproducen en esta sección son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden originalmente del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., sino en los casos en que así se manifieste.

fiscal y reducir el crecimiento de la deuda y su oneroso servicio. En lo que sigue se presenta un panorama general de la economía griega, se describen las características más relevantes del proyecto estabilizador y se analizan las perspectivas de corto plazo a la luz del programa gubernamental.[1]

La tendencia al desequilibrio

Durante el decenio de los setenta la economía griega tuvo un crecimiento dinámico e incluso superior al del conjunto de países de la OCDE. De 1974 a 1979 el PNB helénico creció a un ritmo medio anual de 3.8%, en tanto que el correspondiente a la Organización fue de 2.7%. Las tasas de la producción manufacturera fueron de 4.4 y 2.5 por ciento, respectivamente. En el mismo lapso, empero, los incrementos de los precios al consumidor y del costo por unidad de trabajo en la manufactura fueron de 16.2 y 18 por ciento, respectivamente, por encima de los de la OCDE (10 y 6.8 por ciento, cada uno). En el decenio de los ochenta los desequilibrios se recrudecieron y la economía griega en su conjunto reforzó su tendencia al deterioro. Los déficit de las cuentas externas y de las finanzas públicas se elevaron notablemente, las presiones inflacionarias adquirieron mayor fuerza y la producción se estancó. De 1979 a 1984 el PNB apenas creció 0.4% en promedio, mientras que en la OCDE el aumento fue de 2%; la tasa de inflación fue de 21.8 y 8.4 por ciento, respectivamente; la producción manufacturera promedió −1% para Grecia y 2% para la Organización, y los costos por unidad de trabajo en la manufactura se elevaron 26.3 y 6.1 por ciento, respectivamente. Según los economistas de la OCDE y del Banco de Grecia, el alza de los precios del crudo, la recesión mundial y las políticas expansivas aplicadas casi sin interrupción de 1979 a 1984 ocasionaron el adverso comportamiento de la economía en su conjunto. A pesar del repunte del mercado mundial en 1984 los desequilibrios empeoraron y la economía acentuó su tendencia recesiva.

1. Esta nota se elaboró con base en *Greece, OECD Economic Surveys*, 1985-1986, enero de 1986; "Highlights from the OECD Economic Outlook, December 1985", en *The OECD Observer*, enero de 1986; "Greece", *The European Year Book*; "Greece", *Abecor Country Report*, febrero de 1986, y Adriana Ierodiaconou, "Greek Economic Measures Yield Mixed Results", en *Financial Times*, 8 de agosto de 1986.

Evolución de los principales desequilibrios

Déficit público. La aplicación de políticas económicas de apoyo a la demanda condujo a un continuo deterioro de las finanzas del sector público. El déficit corriente o desahorro se elevó significativamente a partir del decenio de los ochenta al pasar de 0.8% del PIB en 1979 a 8% con respecto al mismo agregado en 1984. En el mismo período el coeficiente de requerimientos financieros netos del sector público (RFSP) se elevó de 5.9 a 15.5 por ciento del PIB, uno de los más altos de la OCDE. El gasto corriente es uno de los factores que más ha influido en ese aumento (en 1984 representó 39% del PIB), en especial las partidas relativas al pago de sueldos y salarios y las transferencias al consumo (en 1984 estas últimas representaron 15.8% del ingreso disponible de las familias, mientras que en 1980 la relación fue de 11 por ciento).

Los pagos de intereses constituyen, sin embargo, el rubro más dinámico del gasto corriente de los últimos diez años; desde 1980 la deuda pública casi se ha duplicado cada dos años y una parte importante está denominada en moneda extranjera. En el futuro, los pagos de intereses continuarán presionando el déficit y los RFSP. El aumento de dichos pagos se originará fundamentalmente en los compromisos de la deuda interna, pues la restructuración de las tasas de interés emprendida recientemente ha implicado un alza del costo del dinero. Otros factores que han impulsado el déficit público se relacionan con la política de contención de precios y tarifas de los bienes y servicios del sector público que en muchos casos se fijaron incluso por debajo de sus costos y, en general, con el rezago de los ingresos tributarios debido a la enorme evasión fiscal, a la falta de progresividad del sistema impositivo y a un sinnúmero de exenciones.

Consumo e inversión. El fortalecimiento del consumo del sector público ha contribuido de manera importante, según los académicos helénicos, a una inadecuada asignación de recursos, que al contraer su disponibilidad para la inversión ha obstaculizado un desarrollo productivo más dinámico y estable. En 1984 el consumo total (privado y público) representó 83% del PNB, mientras que de 1970 a 1980 promedió 78.7%. El incremento de ese agregado fue debido al alza del consumo público de 13.4% en 1970 a 15.8% en 1980 y a 19% en 1984.

El aumento en el consumo se realizó a costa de la inversión física. Mientras que en el lapso 1970-1980 esta última promedió 23.2% del PNB, de 1981 a 1984 dicho coeficiente se redujo a 20% (en 1984 la relación fue de 18.6%). Esto originó retrasos importantes en infraestructura, en el sector industrial y en los programas de ahorro de energía. La inversión productiva promedió en los mismos períodos 15.9 y 15 por ciento, respectivamente. La caída no fue mayor debido al incremento de la inversión pública, cuyo aporte al PNB fue de 5.6 y 6.4 por ciento, en cada uno de los intervalos; los coeficientes respectivos para la privada fueron 10.1 y 8.6 por ciento (en 1984 registró su nivel más bajo desde 1970 al representar 7.4% del PNB). Esta tendencia se atribuye al descenso de la rentabilidad de los negocios, a la difícil situación financiera de las empresas y a la incapacidad para transferir recursos del consumo y también de la inversión especulativa a las inversiones productivas. Como resultado, el crecimiento de la formación de capital fue de 3% en 1984, contra 5% en promedio durante la segunda mitad de los setenta.

La caída de la inversión se vincula a la tendencia descendente de la tasa de ahorro interna bruta. En 1984 esta variable representó 14% del PIB, mientras que durante el decenio de los setenta promedió 23.5%. La causa fundamental de esa disminución fue el deterioro de las finanzas gubernamentales que se tradujo en una progresiva pérdida de su excedente. En 1970 el ahorro de ese sector registró un coeficiente positivo con respecto al PIB de 6%, que a partir de 1980 se convierte en negativo para llegar a −8% en 1984. La caída del ahorro interno elevó la demanda por recursos externos, lo cual incrementó la carga financiera y acentuó el desequilibrio de la balanza de pagos. Así, mientras que en el lapso 1970-1980 el financiamiento foráneo promedió 4.4% con respecto al PIB, en el período 1981-1984 llegó a 5.6%. El financiamiento de la inversión sufrió un cambio importante: durante el decenio de los setenta el ahorro interno cubrió en promedio 84.2% de dicha inversión y de 1980 a 1984 se redujo a 75.5%. Se calcula que en 1985 el coeficiente cayó a 60.5%, casi 24 puntos menos que en los setenta.

El comportamiento de la rentabilidad también explica el descenso de la inversión

privada. Durante la segunda mitad de los setenta las tasas netas de ganancia en la manufactura fueron positivas y a partir de 1982 cambiaron de signo. Las razones se atribuyen al poco favorable entorno internacional, al aumento de la competitividad de los productores extranjeros en el mercado griego —sobre todo a partir de 1981, cuando Grecia se adhirió a la CEE—, a la insuficiencia de inversión, a la falta de progreso técnico y, en suma, al fracaso para adecuar la estructura productiva y comercial a los cambios del mercado mundial. Las causas de esa evolución también se relacionan con el incremento de las cargas financieras, así como con la inflexibilidad del mercado de trabajo y con una acentuada tendencia descendente de la productividad desde fines del decenio de los setenta.

Desde la óptica neoliberal de importantes sectores del Gobierno socialista griego, el elemento más importante en la tendencia descendente de la productividad fue el alza de las remuneraciones en un contexto de control de precios y de fuerte competencia externa. El impulso inicial de los costos de la mano de obra en los últimos años se produjo en 1982 cuando se decretó un aumento considerable a las remuneraciones, que combinado con un mecanismo de indización implantado en el mismo año (ajustes cada cuatro meses) elevó los costos por unidad de trabajo empleado por encima del índice de precios al consumidor. De 1981 a 1984 este último promedió un alza de 21% y los primeros 22.4%. El aumento del costo de la mano de obra ha sido más pronunciado en el sector manufacturero. En el período señalado creció 26.1% (en 1983 el incremento fue de 36%), lo cual abatió la competitividad externa de la manufactura y eliminó los efectos favorables provenientes del deslizamiento del dracma. El dinamismo de las remuneraciones se reflejó, por otra parte, en una mayor participación en el ingreso nacional de 46.7% en 1980 a 52.5% en 1984. Por contra, el aporte de las empresas se redujo de 35.4 a 28 por ciento, respectivamente. Como resultado del establecimiento de las políticas de precios de la CEE y del incremento de las transferencias de ese ente, la agricultura elevó su participación en el ingreso nacional a casi 20% en 1984, el más alto en los últimos 15 años. En ese aumento también influyeron las transferencias gubernamentales y un régimen fiscal y de tasas de interés sumamente favorables.

En resumen, el incremento de los pagos al factor trabajo en un contexto de baja productividad y crecientes presiones inflacionarias se ha constituido, según los estrategas neoliberales, en uno de los más fuertes obstáculos al cambio estructural. Además, dada la apreciable caída de las utilidades y por tanto de los fondos invertibles necesarios para obtener una expansión industrial autónoma, la redistribución del ingreso en favor de las remuneraciones amenaza, en última instancia, las perspectivas de empleo en amplios sectores de la población. Desde otro punto de vista, el aumento de los sueldos y salarios tuvo como propósito impedir un descenso más pronunciado de la demanda y promover por ese medio un impulso a la producción y reinversión internas. Sin embargo, la falta de incentivos o la incapacidad de los productores locales originó que buena parte de esos ingresos se dirigiera a la compra de mercancías importadas. Cabe señalar que de 1973 a 1980 la demanda interna creció en promedio 2.5% a precios de 1970 y de ahí en adelante registró variaciones negativas. En 1984 dicho agregado creció 1% debido al impulso proveniente del gasto de consumo del sector público.

Desequilibrio externo. Los desajustes internos se han manifestado en un creciente deterioro de las cuentas externas. El déficit de la cuenta corriente se elevó de un promedio de 1 200 millones de dólares en la segunda mitad de los setenta a 2 100 millones en la primera mitad de los ochenta; con respecto al PIB dicho desequilibrio pasó de 4.1 a 5.8 por ciento (el coeficiente más alto se registró en 1981, con 6.5%). Como resultado, el endeudamiento externo se ha incrementado rápidamente.

En 1981 Grecia ingresó a la CEE, lo cual le significó renunciar gradualmente a una serie de restricciones a las importaciones a la vez que enfrentarse a mercados altamente competitivos. La curva de aprendizaje fue muy costosa. En ese año la economía griega registró por primera vez un déficit comercial agrícola con la Comunidad y el déficit comercial con ese bloque se incrementó 94%. Ese resultado fue motivo para que en 1982 el Gobierno helénico solicitara a la CEE mayores garantías y un trato más acorde con su desarrollo económico. En la actualidad la mayor parte de las transacciones foráneas griegas se realiza con la Comunidad. En 1984 las exportaciones a ese mercado representaron 54.1% del total y las importaciones 47% del total. Su principal cliente y proveedor es Alemania, que absorbe 19.6% de sus ventas y participa con 16.6% de sus compras. En ese mismo año el déficit comercial de Grecia con la CEE fue de 1 914.3 millones de dólares, casi 40% del déficit total.

La factura petrolera, cuyo déficit ha permanecido en alrededor de 10% del PIB desde 1978, es uno de los factores que han incidido de manera importante en el desfavorable comportamiento externo. Empero, para algunos investigadores la causa fundamental de ese fenómeno se encuentra en el fracaso del Gobierno y de los empresarios para formular una estrategia adecuada para encarar la competencia derivada de la adhesión a la Comunidad. Esto ha propiciado un volumen reducido de exportaciones y alentado el ingreso de productos extranjeros (de 1980 a 1984 el déficit comercial promedió alrededor de 6 000 millones de dólares por año). En realidad, la estructura del PIB a costo de factores (precios de 1970) no ha mostrado cambios relevantes que indiquen una transformación industrial importante. De 1980 a 1984 la participación de la manufactura en ese agregado fue de 20.5% en promedio (menor al promedio de 1977-1980 que fue de 21.5%) y a partir de 1982 registró una pérdida de peso relativo para llegar a su punto más bajo en 1984 con 19.8%. Esto ha determinado una ausencia casi total de cambios cualitativos importantes en la composición del comercio exterior. Éste continúa sustentándose en la exportación de diversas materias primas y en la compra de productos manufacturados. En 1984 las ventas al exterior se integraron en 60.8% por textiles y vestidos, frutas y vegetales, combustibles minerales y lubricantes, hierro y acero, tabaco y aluminio. Las compras de petróleo crudo, maquinaria y equipo de transporte, productos manufacturados y alimentos representaron 80.3% de las importaciones totales.

El superávit de invisibles es el otro factor que ha acentuado la tendencia al desequilibrio externo. Desde 1980, cuando registró su nivel más alto (4 593 millones de dólares), el saldo positivo ha mostrado un descenso sostenido, para llegar a 3 221 millones en 1984, esto es, 29.9% menos que en el año señalado. Consecuentemente, dicha cuenta ha perdido capacidad para financiar el déficit de mercancías de 67.4% que representaba en 1980 a 60.2% en 1984. Los renglones que más han contribuido al deterioro del superávit de invi-

sibles son, por el lado de los ingresos, el turismo, los ingresos navales y las remesas de inmigrantes. Todos esos conceptos registraron tasas medias anuales negativas en el período 1980-1984 de 6.7, 11.9 y 3.9 por ciento, respectivamente. En conjunto, esos flujos se contrajeron en el lapso señalado en 1 303 millones de dólares, lo cual es altamente significativo para un país cuyos ingresos corrientes externos fueron en 1984 apenas superiores a 9 600 millones. Por el lado de los egresos, los pagos de intereses, dividendos y remesas de utilidades se elevaron en el mismo intervalo a un ritmo medio anual de 23.4% y mientras que en 1980 representaron 4.5% de los ingresos corrientes totales, en 1984 la relación se elevó a 11.2 por ciento.

El deterioro de la balanza de pagos ha conducido a un creciente empleo de la deuda externa, la cual se elevó de 7 876 millones de dólares en 1981 a 12 286 millones en 1984 (56% de incremento). El servicio de la deuda, por ende, ha registrado un crecimiento muy dinámico, en especial el rubro de intereses, que tuvo un aumento de 33.3% de 1981 a 1984. En su conjunto, dicho servicio con respecto al total de ingresos corrientes externos se elevó de 9% en 1980 a 19% en 1984.

La economía en 1985

En 1985 los problemas de la economía griega se recrudecieron. Junto a un retroceso del producto se registró un incremento de la inflación (20% contra 18.5% en 1984) y un aumento de la tasa de desempleo (de 8 a 8.5 por ciento). De hecho, casi todos los indicadores mostraron un comportamiento adverso. Se calcula que el crecimiento del PIB a precios de 1970 fue de 1.75%, inferior al promedio del lapso 1973-1980 (3.4%) y a 1984 (2.6%), pero mayor al promedio de 1980-1983 (0.4 por ciento).

El descenso de la actividad económica obedeció a la desaceleración de las exportaciones desde la segunda mitad de 1984 y al incremento de 6% en términos de volumen de las compras externas. Asimismo, contribuyeron a ese comportamiento la notable caída de la producción agrícola (de 6.4% en 1984 a 0.5% en 1985) y el reducido ritmo de aumento del sector manufacturero (de 1.9 a 0.25 por ciento). La disminución del producto no fue más pronunciada gracias a los efectos expansionarios del consumo del sector público (2% de aumento *versus* 1% en 1984) y de su inversión, así como por el dinamismo de los ingresos por turismo. La inversión privada, por su parte, se calcula que cayó 2%, siendo el renglón más afectado la inversión residencial, cuyo nivel de 1985 se estima en 50% por debajo de su pico más alto de finales de los setenta. Esto se atribuye al término de la rápida urbanización, a los controles sobre las rentas y al insuficiente crecimiento del ingreso real disponible.

La inversión productiva privada cayó de 7.4% con respecto al PNB en 1984 a 7.1% en 1985. Esto fue resultado de la persistencia de la difícil situación financiera de las empresas, de la tendencia descendente de la tasa de ganancias, en especial en la manufactura, y del alza de los costos laborales y financieros. También influyó la disminución del ahorro interno que de 14.1% del PIB en 1984 se redujo a 12.1% en 1985. Este coeficiente se integró por un ahorro privado de 21.1% (22.1% en 1984) y un desahorro del sector público de −9% (−8% en 1984). La caída del excedente interno amplió el uso de los recursos externos en el financiamiento de la inversión de 29.5% en 1984 a 39.5% en 1985.

La situación financiera del sector público empeoró. El déficit presupuestario del gobierno central se elevó de 10.4% del PIB en 1984 a 13% en 1985 (dos puntos más de lo proyectado) y se calcula que el coeficiente de RFSP llegó a 17.5% del PIB, cuando un año antes la relación fue de 15.5%. El notable crecimiento de este rubro fue causado por el fuerte aumento de las erogaciones públicas, especialmente del gasto corriente, el cual elevó su participación con respecto al PIB de 39 a 41 por ciento. Los renglones que incidieron en mayor medida en el desajuste financiero público fueron los subsidios a la exportación y a la agricultura, el aumento en la nómina gubernamental, las transferencias a los fondos de seguridad social, el importante crecimiento de la inversión pública, el severo incremento de los pagos de los intereses de la deuda —en especial de la interna debido al alza de las tasas de interés desde 1983— y los retrasos en los ajustes de los precios y tarifas del sector público.

En 1985 el déficit de la cuenta corriente llegó a 3 000 millones de dólares (40.8% de aumento), lo cual elevó su participación en el PIB de 6.5 a 8 por ciento. Todos los rubros importantes contribuyeron al deterioro. En el período enero-septiembre la balanza comercial tuvo un saldo negativo de 4 755 millones, 21.7% superior al del mismo lapso del año anterior. Ese flujo se derivó de un decremento de 4.9% de las exportaciones y un aumento de 9.5% de las compras foráneas. En el mismo intervalo el ingreso neto de invisibles sufrió una caída de 6.4%. En el deterioro de las cuentas externas influyeron —además de la incapacidad estructural— el ligero repunte de la demanda interna y la fuerte preferencia de los consumidores en favor de los productos importados. Por el lado de la cuenta de capitales fue notorio el aumento de las salidas de capital, lo cual se atribuye al desfavorable clima para los negocios, a la especulación derivada de la pérdida de valor del dracma en un contexto de crecientes presiones inflacionarias y de deterioro de las cuentas externas, y a las expectativas de mayores rendimientos en los mercados financieros extranjeros. El endeudamiento neto del sector público se elevó de 1 600 millones de dólares en 1984 a 2 250 millones en 1985, 40.6% de incremento.

El programa de estabilización

En junio de 1985 se celebraron elecciones generales en Grecia. El Partido Panhelénico Socialista (PASOK), cuyo líder es el actual primer ministro Andreas Papandreu, resultó el triunfador de la contienda, al lograr 45.8% de los sufragios totales. Esto le aseguró 157 escaños en el Parlamento y mantener la mayoría absoluta obtenida desde 1981, cuando se constituyó el primer Gobierno socialista de Grecia. El Partido Nueva Democracia (conservador-liberal) obtuvo 110 lugares en el Parlamento y es la segunda fuerza política del país. Inmediatamente después de las elecciones se formó un nuevo gabinete que introdujo cambios importantes en la conducción económica. Las medidas se orientaron en primera instancia a elevar los ingresos públicos, así como a modificar la estructura de precios relativos. Para tales fines, de julio a septiembre se decretaron alzas de precios y tarifas para los vuelos aéreos internacionales, los energéticos y el transporte urbano.

El 11 de octubre el Gobierno socialista anunció la puesta en marcha de un programa de estabilización de corte neoliberal con los objetivos de reducir los desequilibrios externo y fiscal, abatir la inflación y promover el cambio estructural de la economía. Las medidas inmediatas y los propósitos de la nueva estrategia fueron los siguientes:

• Se decretó una devaluación de 15% del dracma.

• Se impuso a los importadores un depósito obligatorio en efectivo a seis meses sin intereses equivalente a 40 u 80 por ciento del valor de las compras consideradas innecesarias. El sistema se aplica a cerca de 40% del total de las mercancías importadas y se excluyen las de maquinaria y equipo. En 1986 se espera reducir 25% el valor de las adquisiciones sujetas a este régimen.

• Se modificó el sistema de indización precios-salarios. Se excluye el efecto de los precios de importación y los salarios se ajustarán sobre la base de la inflación anual proyectada. Anteriormente los movimientos de las remuneraciones eran cada cuatro meses.

• Se planteó el objetivo de mantener los precios agrícolas internos por debajo de la tasa de inflación prevista.

• Reducir el coeficiente de RFSP en cuatro puntos porcentuales del PIB (de 17.5% en 1985 a 13.5% en 1986). Esto se logrará por medio de un programa de recortes del gasto público, del incremento de los ingresos tributarios (combate a la evasión fiscal, supresión de exenciones y aumento de la base gravable por medio de nuevos y mayores impuestos) y del impulso de una adecuada estructura de precios y tarifas del sector público. En 1987 se proyecta reducir en otros cuatro puntos porcentuales el coeficiente de RFSP.

• Establecimiento de una política monetaria restrictiva para atemperar de manera progresiva el crecimiento del crédito interno y elevar las tasas de interés a los sectores que han tenido acceso a réditos preferenciales.

La puesta en marcha del programa de austeridad tuvo como premio inmediato el otorgamiento por parte de la CEE de un crédito para la balanza de pagos por 1 750 millones de ECU (European Currency Unit). Se condicionó el préstamo a diversos requisitos: reducir la tasa de inflación a 15% a fines de 1986 y a 10% a mediados de 1987, equilibrar la balanza comercial para 1988, establecer el IVA y remover las restricciones a los movimientos de capital. Si bien esos condicionamientos son consecuentes con la actual política griega, la dinámica del desequilibrio de la economía en su conjunto hará muy difícil que algunos de ellos se cumplan.

Para que nadie piense que es broma, el presupuesto de egresos para 1986 —presentado en noviembre de 1985— incorpora fielmente los paradigmas del programa de estabilización. Se prevé una reducción del déficit presupuestario del Gobierno central de 2.7 puntos porcentuales con respecto al PIB, para ubicarlo en 10.6% de ese agregado (en 1985 dicho desajuste representó 13.3%). Esto se logrará mediante un considerable incremento de la recaudación tributaria y del descenso del crecimiento del gasto. Por el lado de los ingresos —que en conjunto se estima crezcan 31.8%— el presupuesto del gobierno central prevé un alza de 53% del rendimiento de los impuestos directos y de 32.5% de los indirectos. Excepto los pagos del servicio de la deuda, todas las demás erogaciones se proyectaron para crecer mucho menos que en 1985 (en total el gasto se incrementará 20.3% en términos nominales). En particular las modificaciones en el mecanismo de indización y la nueva escala de salarios resultarán en un notable freno al crecimiento de la factura de remuneraciones de 28% en 1985 a 17% en 1986, menor a la tasa de inflación esperada (la OCDE calcula un incremento de alrededor de 21%). Se prevé que los subsidios a la agricultura se reducirán en términos reales y que el gasto de inversión registrará un descenso de 24% en 1985 a 16% en 1986.

Las previsiones gubernamentales proyectan una caída de 37% en términos reales del déficit de operación de las cerca de 50 empresas y organismos del sector público y de las agencias de seguridad social. En ello influirán las reducciones de los gastos de servicios personales y de inversión y en menor medida el incremento de los ingresos por concepto de bienes y servicios (en diciembre de 1985 los precios y tarifas se incrementaron de 15 a 25 por ciento). Esas medidas deberán rendir un ahorro adicional para el sector público de 1.5 puntos porcentuales del PIB y conducir —junto con la austeridad espartana del Gobierno central— a un descenso de los RFSP de 17.5% del PIB a 13.5%. El programa monetario plantea un otorgamiento selectivo del crédito, fundamentalmente sobre la base de los resultados de las empresas, y una desaceleración de la oferta monetaria de 23% en 1985 a 16% en 1986.

Pronósticos para 1986

La puesta en marcha de medidas restrictivas en materia de políticas fiscal, monetaria y de ingreso, conducirá a una contracción de la demanda interna que se revertirá en un mayor control de las presiones inflacionarias. La reasignación de recursos en favor del sector privado a que dará lugar el recorte del gasto público y el freno de los pagos al factor trabajo promoverá el crecimiento de la inversión productiva. Mediante el abatimiento de costos, del manejo del tipo de cambio y del excedente generado por un comportamiento económico recesivo, se reforzará la competitividad externa y se producirá un incremento de las exportaciones, completándose de esta manera el círculo virtuoso previsto por los estrategas del Gobierno socialista.

Las perspectivas para 1986 elaboradas por la OCDE a finales de 1985, a la luz de la estrategia estabilizadora y de las previsiones presupuestarias, se resumen en seguida: a] el PIB a precios de 1970 registrará un decrecimiento de 0.5% (un año antes aumentó 1.75%); b] por primera vez en siete años el sector manufacturero tendrá un crecimiento mayor al del PIB, pues se prevé una ligera recuperación de 0.5% (en 1985 el incremento fue de 0.25%); c] la tasa de desempleo se elevará de 8.5% en 1985 a 9% en 1986; d] se estima que el gasto de consumo del sector público crecerá apenas 0.5% (4.25% en 1985) y que el de inversión tendrá una caída en términos reales; e] la inversión fija total y el consumo privado decrecerán 2.25 y 2 por ciento, respectivamente, y f] la demanda interna en su conjunto registrará una variación de −2.75%, cuando en 1985 el coeficiente fue de 2%, es decir, una retracción de casi cinco puntos que probablemente profundizará algunos problemas económicos y sociales que por ese medio se pretenden resolver. El déficit de la cuenta corriente se calculó en 1 800 millones de dólares, 38% menor al de 1985. En ese resultado se consideró un aumento del volumen de exportaciones de 2.25% y una caída del volumen de importaciones de 3.75%. El déficit comercial se previó en alrededor de 1 000 millones de dólares menos que el nivel de 1985 y se espera un ligero repunte (3.2%) del superávit de invisibles.

El comportamiento económico de los últimos meses no ha sido precisamente el esperado. Para ciertos analistas los resultados podrían calificarse como mixtos, algo así como la teoría del vaso medio lleno o

medio vacío. De hecho existe cierto ambiente de hostilidad hacia las políticas gubernamentales tanto de los grupos de izquierda como de los conservadores. Para los primeros, el programa es un fracaso, puesto que la peor parte ha recaído sobre los trabajadores, lo cual ha empeorado sus niveles de bienestar. Las alzas de precios y la política salarial adoptadas a partir de octubre produjeron una ola de huelgas que podrían repetirse en el curso de este año. El ala liberal de la economía —representada cabalmente en el gabinete económico por el Banco de Grecia— insiste en que el programa precisa medidas complementarias más eficaces para abatir los problemas estructurales y revertir la declinación tendencial de la inversión neta privada, cuyas cifras reales se encuentran por debajo del nivel alcanzado antes del primer colapso petrolero de 1973.

Las medidas propuestas se orientan a profundizar la flexibilización de los controles de precios y de los mercados financiero y laboral. Esto es, erigir el libre juego de la oferta y la demanda en el supremo ordenador de la economía. Recientemente el Banco de Grecia propuso un incremento de 4% de las tasas de interés administradas (subsidiadas) con el fin de abatir el crédito y ajustarse a su meta de crecimiento y promover el ahorro privado. En los cuatro primeros meses del año en curso el crédito se elevó a una tasa anualizada de 23.5%, cuando la meta es de 14%; el ahorro aumentó 1.9%, contra 6% en el mismo período del año anterior. Esta caída, según el organismo, ha incrementado en cierta medida el empleo del endeudamiento externo por encima de lo previsto. Se calcula que el mes de agosto los préstamos ascendieron a 2 000 millones de dólares, 300 más que los proyectados para todo el año. El Ministerio de Economía, sin embargo, se opuso al alza de rédito aduciendo que ello presionaría al alza los costos financieros de los sectores público y privado. En su lugar sugirió ejercer un estricto racionamiento de los préstamos y por ese medio reducir el crecimiento de la demanda interna y de las importaciones que se ha presentado durante la primera mitad del año.

Las cifras de la balanza de pagos pronostican un recrudecimiento del desequilibrio. En el período enero-mayo las importaciones no petroleras (único rubro que puede reducirse efectivamente) se elevaron 8%, mientras que las exportaciones no petroleras (excluyen combustibles minerales y lubricantes) lo hicieron en 10.4%, por debajo de las expectativas sustentadas en el incremento de la competitividad proveniente de la devaluación de 15% del dracma decretada en octubre de 1985. Este comportamiento, junto con el descenso de los ingresos invisibles, provocó un déficit corriente de 1 466 millones de dólares, 81.4% de la cifra proyectada. Ese desajuste se produjo a pesar de un ahorro de 515 millones en la factura petrolera y del aumento de 219 millones de los ingresos de la CEE. El nivel del déficit, según *Financial Times*, es aún más preocupante si se considera que las autoridades helénicas reconocieron que en sus proyecciones no se tomó en cuenta la dramática caída de las cotizaciones de crudo. Si ese pequeño detalle lo hubiesen integrado a sus supuestos, probablemente la cifra proyectada para el déficit corriente sería mucho menor y los cuestionamientos más severos. Algunos economistas calculan que al final de 1986 dicho déficit será de por lo menos 2 000 millones de dólares, 11.1% superior a la meta. El Ministerio de Economía, por su parte, no ha modificado su previsión original arguyendo que los beneficios de la caída de los precios del crudo se manifestarán plenamente durante la segunda mitad del año.

El futuro inmediato

Los acontecimientos económicos recientes muestran que cuando menos durante este año las dolorosas medidas para reducir drásticamente los desequilibrios serán insuficientes. Desde la óptica de algunos estrategas gubernamentales y de los grupos neoliberales esto deberá calificarse como un fracaso del programa. Desde otro punto de vista significará que los efectos económicos y sociales más severos del ajuste se presentarán más adelante. Por ahora el crecimiento de la demanda interna, cuya tasa anualizada supera las proyecciones, implica la existencia de cierto dinamismo en el consumo e inversión globales y que el empleo aún no ha caído a niveles alarmantes.

El Gobierno socialista no abandonará su intención de prolongar su política de ajuste durante los próximos años. Actualmente se estudia la aplicación de medidas adicionales que aseguren el abatimiento sostenido de la demanda agregada que conduzca, a su vez, a la moderación de las presiones inflacionarias, a una mejoría de los términos de intercambio y a una corrección de las pautas de ingreso en favor del capital. Sólo por ese medio será posible inducir el incremento sostenido de la productividad y alentar la modernización y, en consecuencia, adaptar la capacidad de respuesta de la economía a los retos de la competencia del mercado internacional.

El proceso, pues, implica continuar la remoción de obstáculos que actúan en contra del desarrollo potencial de la economía y contribuyen a perpetuar la espiral inflacionaria, tales como el excesivo intervencionismo estatal que inhibe la inversión privada, rigideces del mercado de trabajo y deficiente manejo de los recursos financieros. En los dos primeros aspectos se han logrado progresos. El abatimiento del salario real, el propósito implícito de vincular el empleo a las fluctuaciones de la actividad, el reforzamiento de la tributación indirecta (en 1987 entrará en vigor el IVA), la liberación de recursos en favor del desarrollo privado a que dará lugar el recorte del gasto público y la remoción de los controles de precios, constituyen pasos importantes en ese sentido. Con respecto al sistema financiero, los esfuerzos se han orientado a simplificar la estructura de las tasas de interés y ofrecer rendimientos reales. Los cambios institucionales se han dirigido a limitar la injerencia del Gobierno en la operación del sistema financiero, así como a introducir mayores controles sobre la liquidez de la economía. Empero, aún existen regulaciones excesivas que al obstaculizar el libre juego de las fuerzas del mercado ocasionan distorsiones e ineficiencias en la asignación de recursos.

Como todo programa de corte neoliberal que se respete, y el de Grecia no es ninguna excepción, el costo del ajuste recaerá principalmente sobre la clase trabajadora. El futuro próximo augura mayores apremios para el grueso de la población, no sólo por el abatimiento de sus ingresos reales en un entorno inflacionario, sino por la inseguridad en el empleo, que es lo que realmente significa lo que los neoliberales denominan eufemísticamente "flexibilización de los mercados de trabajo" y por los recortes del gasto público que afectarán importantes programas sociales. En el futuro, pues, la economía griega deberá adecuarse a la disponibilidad real de recursos y la sociedad acostumbrarse a aceptar los sacrificios que le impongan. □

Homero Urías